



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: YANEL TOMÁS LUNA CARDOCI
Demandados: COLPENSIONES y PROTECCIÓN S. A.
Radicado: 05001 31 05 011 2020 00146 01
Sentencia: S-006

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por PORVENIR S. A. y por COLPENSIONES, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín el día 12 de mayo de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

YANEL TOMÁS LUNA CARDOCI demandó a PORVENIR S. A. y a COLPENSIONES, pretendiendo lo siguiente:

- 1. Declarar la INEFICACIA EL TRASLADO del afiliado al FONDO PRIVADO PROTECCIÓN, por existir vicios en el consentimiento y por afectar los derechos mínimos y garantías del afiliado.*

2. Por consiguiente, declarar la inexistencia del contrato de afiliación a dicho fondo privado, y como quiera que el demandante, ESTUVO AFILIADO Y COTIZÓ A PROTECCIÓN HASTA SEPTIEMBRE DE 2019, condenar a este fondo a pasar a COLPENSIONES todos los aportes y rendimientos, BONO PENSIONAL, sumas adicionales de las aseguradoras. Este traslado se debe realizar sin descontar ninguna suma de dinero por concepto de gastos de administración, por sumas trasladadas para los riesgos de invalidez y muerte, ni comisiones, ni aportes para la garantía de la pensión mínima, con el fin de equiparar las cotizaciones que se deben trasladar a COLPENSIONES como si el demandante nunca se hubiere trasladado del régimen pensional.
3. Que se declare válida, vigente y sin solución de continuidad la afiliación del demandante al RPM hoy administrado por COLPENSIONES y se ordene a esta entidad a aceptar el traslado y a reactivar la afiliación del demandante al RPM con todos los aportes efectuados al RAIS con sus rendimientos.
4. Que se declare que COLPENSIONES es quien debe asumir la pensión de vejez del demandante, y se le ordene su reconocimiento Por haber ya cumplido los requisitos de ley.
5. Que se declare que el afiliado tiene derecho de regresar al RPM administrado por COLPENSIONES, por el hecho de que PROTECCIÓN no le brindó la mejor asesoría a quien tenía derecho antes de cumplir los 52 años de edad.
6. Se condene a pagar los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
7. Que se condene a la demandada a lo que ultra y extra petita se logre probar.
8. Que se condene en costas y agencias en derecho a las demandadas

SUBSIDIARIA: Que de igual manera se condene al fondo de pensiones PROTECCIÓN a pagar los perjuicios causados al demandante desde el día en que cumplió los requisitos para su pensión hasta el día en que ésta se haga efectiva, porque el fondo privado es el culpable de que el actor no se hubiere pensionado..."

LOS HECHOS:

Expone el demandante como fundamento de sus peticiones, que nació el 22 de octubre de 1957; que comenzó a cotizar en el ISS, hoy COLPENSIONES, desde el mes de mayo de 1981 y hasta el mes de abril de 1997, fecha en la que se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de PROTECCIÓN S. A., entidad en la que se encuentra afiliado actualmente. Que al momento de realizar el acto de afiliación a dicho fondo, este nunca le brindó la información adecuada acerca de los riesgos que corría por realizar tal traslado, ni le indicó cuales eran las ventajas y desventajas de permanecer en uno u otro régimen pensional. Indica también que no le brindaron información acerca del saldo mínimo o capital que tendría que tener acumulado para acceder a una pensión de vejez en el RAIS, que tampoco le hicieron una proyección de la mesada pensional que recibiría en el RAIS, y menos un comparativo de la mesada que recibiría en el RAIS con respecto a la que recibiría en el RPMPD. Que nunca le brindaron la reasesoría pertinente previo al cumplimiento de los 52 años de edad de modo que le permitiera retornar al RPMPD y de este modo recuperar los beneficios que tenía en dicho régimen, por lo que considera que sufrió un engaño por parte del fondo privado, por cuanto no le brindó una información veraz y objetiva que le permitiera escoger la mejor opción respecto a su situación pensional.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento del demandante, su afiliación al ISS y su posterior traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de PROTECCIÓN S. A. Frente a los demás hechos dice que no le constan por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento que deben ser probadas en el curso del proceso. Se opuso a las pretensiones de la demanda y en su defensa propuso las excepciones de mérito de improcedencia de la declaratoria de ineficacia o nulidad de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, prevalencia de la autonomía de la voluntad privada, prescripción, imposibilidad de la condena en costas,

compensación e inexistencia de la obligación de reconocer pensión de vejez.

PROTECCIÓN S. A. por su parte indica en su escrito de respuesta que es cierto que el demandante suscribió el formulario de afiliación a esa entidad el 30 de abril de 1997. Indica que tal traslado se dio en cumplimiento de las obligaciones vigentes para la época y que además se efectuó la debida asesoría, resaltando el hecho de que en esa oportunidad se le brindó a la actora información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de afiliación, las diferencias que existen entre uno y otro régimen. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por considerar que tal acto goza de plena validez y en su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, y la de inexistencia de la obligación de devolver la prima de seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 12 de mayo de 2022, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín tomó las siguientes decisiones:

“PRIMERO: DECLARAR la ineficacia de la vinculación al RAIS del señor YANEL TOMÁS LUNA CARDOCI quien se identifica con cédula de ciudadanía número 70.521.017, administrado por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA.

SEGUNDO: ORDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA, a trasladar

del RAIS al RPMCPD administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES EICE los aportes del demandante como son cotizaciones, gastos de administración, con todos sus frutos e intereses, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, el porcentaje correspondiente a la garantía de pensión mínima, y, también deberá trasladar la prima de reaseguro de FOGAFIN y los aportes al fondo de solidaridad pensional que se hubieren causando en el tiempo en que el actor estuvo vinculado a dicha administradora, en razón a la declaración de la ineficacia del traslado.

TERCERO: Se ORDENA a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA, a indexar los dineros a devolver por concepto de gastos de administración, consistentes en, costos de administración, las primas de los seguros de invalidez y sobreviviente, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, durante el tiempo que el demandante estuvo vinculado a dicho fondo de pensiones y sin aplicar equivalencia alguna, igualmente se dispone que al momento de cumplir la orden los conceptos aparezcan discriminados por la AFP con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, ingreso base de cotización, aportes y demás información importante que los justifique.

CUARTO: La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES EICE deberá recibir los dineros entregados por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA, y reactivar la vinculación del señor YANEL TOMÁS LUNA CARDOCI al RPMPD sin solución de continuidad.

QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, entidad representada legalmente por el señor Juan Miguel Villa Lora, o por quien haga sus veces, a reconocer y pagar al señor YANEL TOMÁS LUNA CARDOCI la prestación económica de pensión de vejez a partir del 01 de noviembre de 2019, sobre 13 mesadas anuales, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES EICE a pagar el valor de la indexación de la condena para cada una de las mesadas pensionales, teniendo como IPC inicial el mes de diciembre 2019 y hasta que se pague efectivamente la obligación, aplicando la formula establecida en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: Las COSTAS están a cargo de las entidades demandadas, dentro de las cuales se fija como agencias en derecho la suma de \$1.500.000,00 correspondiendo el valor de \$1'000.000,00 a cargo de PROTECCIÓN SA, y la suma de \$500.000,00 deberá ser cancelada por COLPENSIONES EICE.

OCTAVO: NO PROSPERAN las excepciones de PRESCRIPCIÓN propuesta por las entidades demandadas y la de COMPENSACIÓN formulada por Colpensiones EICE.

NOVENO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra por la parte actora."

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de PROTECCIÓN S. A. interpuso recurso de apelación de manera parcial frente a la decisión adoptada por el juez de primera instancia y para el efecto solicitó sea revocada la misma en lo que tiene que ver con la CONDENA a tendiente a que se devuelvan los gastos de administración y seguros previsionales, pues en su sentir, tales descuentos se encuentran legalmente autorizados y contemplados en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 7º de la Ley 797 de 2003. Que además del certificado de aportes allegado al proceso se puede observar que esos aportes obtuvieron una ganancia, lo que demuestra que existió una buena administración de esos aportes por parte del fondo, por lo que de prosperar dicha condena se estaría configurando un enriquecimiento sin justa causa a favor de COLPENSIONES. Indica además que frente a estos conceptos opera el fenómeno jurídico de la prescripción, por lo que solicita sea declarada la misma.

A su turno, el apoderado de COLPENSIONES solicita se revoque la decisión adoptada por el Juez de primera instancia en lo que tiene que ver con la condena de la pensión de vejez a cargo de COLPENSIONES y en su lugar la misma sea reconocida en su totalidad por la PROTECCIÓN S. A., o en su defecto, que sean trasladados los dineros por parte de dicho fondo de manera que cubran de manera íntegra la prestación económica de la pensión de vejez al demandante. De igual modo solicita sea revocada la decisión de primera instancia en lo que

tiene que ver con la condena en costas a COLPENSIONES para en su lugar se proceda a absolver a la entidad por tal concepto.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Pese a que se brindó la oportunidad a las partes para que presentaran alegatos de conclusión, ninguna presentó escrito en tal sentido.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES y PORVENIR S. A. en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: *i)* El señor YANEL TOMÀS LUNA CARDOCI nació el 22 de octubre de 1957; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones allí, el 18 de mayo de 1981; y *iii)* el 30 de abril de 1997 suscribió formulario de afiliación o traslado ante la AFP PROTECCIÓN S. A., entidad en la cual se encuentra actualmente vinculado.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de las consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993¹, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social*

¹ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador."

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- i)* El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- ii)* El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- iii)* Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- iv)* No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la parte actora, se destaca solo su manifestación en torno a que procedió a realizar el traslado de régimen pensional a través de PROTECCIÓN S. A. luego de que una

asesora de ese fondo lo abordara un día en la empresa en la cual laboraba, que en dicha oportunidad le manifestaron acerca de la conveniencia de realizar dicho traslado ya que se podía pensionar con menor edad y una mesada pensional más favorable a la que podría obtener de continuar en el régimen de prima media con prestación definida, pero es enfático en manifestar que en momento alguno le dieron a conocer documentación de la cual pudiera obtener información adicional. Indica también que ese día la asesora de PROTECCIÓN S. A. le manifestó que el ISS se iba a acabar. Indica además que no se acercó a ninguna oficina a verificar la información que la asesora le estaba brindando porque confió en la información que le estaban proporcionando. Que no recibió reasesoría alguna por parte de PROTECCIÓN S. A. pero si recuerda el hecho de que en una oportunidad le indicaron que habían llamado a la oficina por parte de dicho fondo y le dejaron el mensaje que ese día debía hacer una “vuelta” y que contaba con una hora para dicha gestión pero que tampoco dijeron cuál era esa “vuelta” y que la llamada tampoco se la repitieron. De lo anterior no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a devolver.

De otro lado, en cuanto a la devolución de dineros distintos a los aportes obligatorios, tales como cuotas de administración, seguros previsionales, porcentaje de garantía de pensión mínima u otros conceptos, basta con indicar que, siguiendo aquellos mismos pronunciamientos de la jurisprudencia laboral, esta Sala ha considerado que es factible ordenar a las AFP correspondientes, la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación fallida, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto las cosas vuelve a su estado anterior, como si el traslado nunca hubiera existido.

En tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL4964-2018, SL2877-2020, SL5595-2021 o SL1637-2022, lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia. (...)*

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la*

encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."

Con base en lo anterior, la decisión de primera instancia será confirmada, pero la **ADICIONA** en el sentido de advertir que los conceptos a trasladar por parte PROTECCIÓN S. A. referidos en la sentencia de primera instancia, se deberán hacer dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

Se indica además que no resulta procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

"En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021)."

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al

estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Pensión de vejez.

Finalmente, no existe duda en cuanto que, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, el demandante acredita en la actualidad, y aun desde el fallo de primera instancia, la totalidad de los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez, pues teniendo en cuenta que nació el 22 de octubre de 1957, significa que los 62 años de edad los tiene acreditados desde el mismo día y mes del año 2019.

Y de otro lado, de acuerdo al reporte de cotizaciones que fuera aportado al proceso y que se encuentra actualizado al 22 de febrero de 2020, se evidencia que el actor acreditaba, para ese entonces, un total de 1.675,86 semanas cotizadas en toda su vida laboral, las que sin duda resultan superiores a las 1.300 exigidas en aquella disposición legal, y, por tanto, se ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez a partir del 1º de noviembre de 2019, sobre 13 mesadas anuales, pues la última cotización al sistema general de pensiones realizada por el actor tuvo lugar en el mes de octubre de 2019, cumpliéndose así con lo dispuesto no solo en los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990 que hacen referencia a la causación y disfrute de la pensión de vejez, sino también que las cotizaciones que se realizaron al sistema pueden tener incidencia en el valor final de la prestación que se reconoció, y así lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, por lo que la decisión del Juez de primera instancia de reconocer la pensión de vejez a partir del 01 de noviembre de 2019 y sobre 13 mesadas, se encuentra ajustada a derecho.

Condena en costas a COLPENSIONES

De otro lado, en lo que a COLPENSIONES se refiere, la condena a recibir el valor de los aportes realizados a la AFP del RAIS, a reactivar la afiliación del demandante y reconocer la pensión de vejez, es solo la consecuencia lógica de la orden previamente impartida en este proceso, en el sentido de declarar la ineficacia de esa afiliación al RAIS, de manera que bien puede decirse que, sin esta orden, aquellas condenas no se hubieran producido.

Dicho de otro modo, era inexigible otra conducta para COLPENSIONES antes de que la presente declaratoria de ineficacia del traslado se hubiere proferido, pues esta entidad no es autoridad judicial como para resolver, antes del proceso, la reclamación de la demandante, de manera que no admisible imponer costas en su contra, razón por la cual se **REVOCA** la decisión de primera instancia en lo que tiene que ver con la condena en costas a cargo de COLPENSIONES, para en su lugar absolverla por dicho concepto.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S. A., por haber sido vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín el día 12 de mayo de 2022, pero la **ADICIONA** en el sentido de advertir que los conceptos a trasladar por parte PROTECCIÓN S. A. referidos en la sentencia de primera instancia, se deberá hacer dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, y la **REVOCA** en cuanto condenó en costas a COLPENSIONES, para en su lugar absolverla por este concepto.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3b94ffdbae84ca6a5a53b197cd373d7653b2a0d11c0bba5b1faa6da647d838c2**

Documento generado en 26/01/2023 01:12:58 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>